

# Escrito documentado

de la Dirección del Instituto Nacional  
de Segunda Enseñanza de Málaga

al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública

y Bellas artes

relativo al caudal procedente de la extinguida

“Congregación de San Felipe Neri”

en la misma ciudad.

---

IMPRENTA ZAMBRANA  
MÁLAGA

2491



# Escrito documentado

de la Dirección del Instituto Nacional  
de Segunda Enseñanza de Málaga

al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública

y Bellas Artes,

relativo al caudal procedente de la extinguida

“Congregación de San Felipe Neri”

en la misma ciudad.





## ESCRITO

AL EXCMO. SR. MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.

Don Julio Fernández Ramudo, mayor de edad, catedrático, con cédula personal de clase 9.<sup>a</sup> tarifa 1.<sup>a</sup> expedida en esta ciudad el 24 de septiembre último con el número 7,047, como Vice-Director, en funciones accidentalmente de Director, del Instituto Nacional de segunda enseñanza de Málaga, en el expediente que se sigue sobre «regularización para poder llegar a la clasificación de la Obra Pía», conocida por «Caudal de San Felipe Neri», según reza edicto inserto en el Boletín oficial de esta provincia de diez y seis de julio último, respetuosamente parezco y digo: Que el derecho, actual y desde hace mucho tiempo, de este Instituto de segunda enseñanza a los bienes que fueron de la mencionada fundación o de ellos directa o indirectamente procedan (salvo la iglesia con sus accesorios que luego se dirá) es tan manifiesto e inconcuso y de tal manera viene asentado en títulos que llegan a lo más firme e inmovible en el orden legal, que acaso pudiera parecer ocioso acudir en nombre del mismo a la audiencia pública abierta según dicho edicto, por ser de esperar confiadamente de la ilustración y rectitud de esta digna Junta provincial de Beneficencia y de la Superioridad el informe y la resolución, respectivamente, que son de ineludible justicia a la vista de antecedentes de que ya disponen. Mas como, de una parte, nunca esté de más la serena y documentada alegación del derecho que nos asiste; sea, de otra, conveniente salir desde luego al encuentro de cualquier nebulosa o duda que hayan podido motivar o a que se presten medidas recientes, aunque meramente interinas, y en definitiva no se renuncia ni enerva con esta alegación la defensa (que expresamente reservo) del mismo innegable derecho en cualquier otra vía legal si preciso fuera, a dicha información acudo, en nombre de este Instituto, exponiendo como base de mi petición en ella, concretada al final, los siguientes hechos y subsiguientes fundamentos legales.

## Hechos o antecedentes.

### 1.º

**Escritura de 5  
julio 1739.**

Título originario, punto de partida absolutamente inicial, en este asunto es la escritura de donación que en esta ciudad, ante don Hermenegildo Ruíz, escribano público de ella, otorgó el día cinco de julio de mil setecientos treinta y nueve el señor don Antonio Tomás Guerrero de Coronado y Zapata, conde de Buenavista, presbítero, de esta vecindad. Obra esa escritura por copia autorizada entre los antecedentes del caso en el Ministerio a que tengo el honor de dirigirme, y de esa misma copia autorizada ha obtenido últimamente otra simple esta Junta provincial (siempre que así, sin más, se diga en este escrito entiéndase la de Beneficencia de Málaga). A tal documento y a sus cláusulas como perfectamente conocidas y compulsables en ambos centros, puedo, pues y habré de referirme.

### 2.º

**Donación a Pa-  
dres de la Con-  
gregación del  
oratorio de San  
Felipe Neri.**

En tal escritura manifestó el otorgante, conde de Buenavista, cómo, hacía años, había construido a su costa una iglesia a la entrada de las tres calles de Gaona, Cabello y de las Parras de esta ciudad, confinando por el altar mayor con una casa principal que el mismo señor tenía en dicha calle de Gaona, siendo desde un principio su ánimo que dicha iglesia sirviese para los Padres de la Congregación del oratorio del señor San Felipe Neri, «para que en ella practicasen su sagrado instituto»; hizo relato de correspondencia sobre ello sostenida (y que la escritura inserta) con el a la sazón Obispo de esta Diócesis Excmo. Sr. Cardenal Fray Gaspar de Molina y Oviedo, de la que resultaba la aprobación y la gratitud más explícitas del Prelado a tal designio y su delegación en el señor don Felipe Martín Obejero, Gobernador, Provisor y Vicario General del Obispado, para intervenir en lo que fuere menester en la ejecución de ello y, llevándolo a efecto, el citado conde de Buenavista, hizo a los padres de la Congregación de San Felipe Neri (los concurrentes en tal concepto a la escritura fueron cinco: don Marcos Antonio de Aguiar, don Juan Antonio Pérez de Espinosa, don Francisco Díez Cruzat, don Antonio Martínez y don Francisco de Herrera, todos presbíteros, fundadores los dos primeros y cofundadores los tres últimos) «para ellos—se copia a la letra de la escritura—» y para todos los que le subseñeren donación pura, perfecta, perpetua e irrevocable, inter vivos en posesión y plena propiedad de la referida iglesia con todo cuanto en ella hay y le esté anexo y de la iglesia subterránea «que dicho señor otorgante hizo fabricar debajo de la principal», y la misma donación les hizo al tenor de dicha escritura «de la casa principal propia

»del señor otorgante, con su agua de piés comprada a esta ciudad y su jardín que está en dicha calle de Gaona y confina por un lado con el altar mayor de dicha iglesia», de otra casa en la calle de Cabello, otra en la de la Cruz Verde, otra en la del Refino, otra en la de las Aceras y una tercera parte y cuatro partes de las cinco de otra tercera de otra casa en la calle de la Victoria, todas de esta ciudad, y de alhajas, adornos, vestiduras, objetos para el culto, pinturas, estatuas, etc., minuciosamente reseñado todo en la escritura a que nos referimos.

3.º

**Condiciones 1.<sup>a</sup>  
a 9.<sup>a</sup>**

Manifestó el donante que hacía tal donación «con las precisas »declaraciones y condiciones siguientes», estableciéndolas a continuación en número de quince, de las que, muy someramente aludido aquí lo que no sea del caso directamente ahora, la *Primera* manda y regula el uso que de la capilla subterránea había de consentirse a la piadosa congregación o hermandad llamada «Escuela de Cristo»; la *Segunda* habla de ciertos usufructos y censos sobre las casas en las calles de la Cruz Verde, Refino, Las Aceras y la Victoria; la *Tercera* de ciertos censos sobre terrenos en que radica la iglesia, la casa principal y otras; la *Cuarta* de una capellanía de doce misas dotada con cien ducados de renta anual sobre otras casas distintas de las donadas; la *Quinta* de las estatuas de piedra existentes en el jardín de la principal donada; la *Sexta* del uso de la tribuna en el altar mayor sobre la puerta de la sacristía por la señora doña María Guerrero de Coronado Zapata, Condesa de Villalcazar de Sirga, viuda, hermana del donante, y para los demás patronos que fueron de dicha iglesia donada, sus mujeres, hijos y descendencia; la *Sétima* de inhumaciones en el panteón grande de la iglesia; la *Octava* de unos oficios solemnes que por la intención del señor otorgante habían de celebrar dos veces todos los años «dichos padres y congregación en el tiempo que en dicha iglesia subsista y los que en ella le subsedieren» y la *Novena* sobre utilización de la capilla subterránea para confesiones de hombres.

4.º

**Condición 10.<sup>a</sup>  
(Traspaso a terceros.)**

Mención especial merece, por ser hoy y para el caso la más fundamental de dicha escritura, su condición *Décima* en su parte final. En tal condición, proveyendo el otorgante al supuesto de que «en algún tiempo cesase o se extinguiese dicha congregación o por no haber sujeto que »quiera permanecer en ella, o, los que hayan no sean idóneos para el instituto de la Congregación, o sean expelidos de ella, o por cualquier »otro motivo o accidente del tiempo», disponía para entonces una serie de llamamientos, por el Sr. Obispo, que fuese a la sazón de este Obispado, concordado con el Patrono, a otros clérigos u otras congregaciones que

podrían venir a reemplazar a los primeros donatarios y finalmente ordenaba que, si pasados en esos llamamientos dos o tres años «en ellos—se copia a la letra—no hubiesen venido los que y en la forma que van llamados, entonces pueda el Sr. Obispo con consentimiento e interbención del Sr. Patrono dar destino a todo lo que en esta escriptura va donado y los padres hubiesen adquirido y estava dicha congregación poseiendo a otro fin piadoso, el que más bien visto le sea, pero siempre reteniendo dicha iglesia la adlocación de señor Sn. Felipe Neri u procurando la ocupe quien practique instituto que mas se aserque, asimile y equiburga a el de dicha congregación del señor Sn. Felipe Neri».

5.º

**Condiciones 11.<sup>a</sup>  
a 15.<sup>a</sup>**

Determinó en la condición *Undécima* el régimen interino durante los años de llamamientos y previno expresamente en la *Duodécima* que si la congregación faltase no podrían sus Padres separar, aplicar, ni llevarse para otra congregación, o para otras personas, comunidades o lugares pios los bienes raíces muebles, semovientes, créditos, derechos u otros cualesquiera efectos que hubieren pertenecido a dicha congregación o se adquiriesen para ella en adelante, si no que todo había de quedar y conservarse con la referida administración en esta ciudad para la congregación sucesora o para cualesquiera otros fines piadosos que fijaran los Sres. Obispo y Patrono según lo dicho; en la *Décima tercera* que, de verificarse lo previsto en la *décima*, había de quedar a salvo y cumplirse por los sucesores de la congregación extinta en la iglesia, como subrogados en su lugar las demás condiciones de la escritura, a lo cual habrían de obligarse por otra nueva que otorgasen siempre que se les pidiera por el Sr. Patrono que es o fuese; en la *Décima cuarta* excita a la congregación donataria, a, mediante las oportunas licencias, obtener la erección y establecimiento en dicha iglesia de la Venerable Orden Tercera de Servitas y, finalmente, en la *Décima quinta* reservó «en sí para sí y los subseores en su casa y mayorazgo para siempre jamás el patronato tanto de la iglesia principal como de la subterránea donadas» con todas las preeminencias del caso (algunas de las cuales menciona) y habiendo de gozarlas desde el primer momento la señora condesa de Villalcazar de Sirga, viuda, hermana del otorgante, pero sin que por dicho patronato quedara obligado él ni sus sucesores a reparar dichas iglesias ni nada de lo donado, sino que todo esto sería a cargo de la congregación donataria y de los que por su falta le sucediesen.

**Final de la es-  
critura.**

Concluye la tan aludida escritura con una reiteración expresa por el otorgante de plena y absoluta transmisión y entrega del dominio y la posesión de lo donado a dichos padres y a «quienes por su falta les subse-



diere», con la aceptación y confesión del recibo de todo lo donado, que, en términos también cumplidos y explícitos, formulan los donatarios, expresando además su gratitud por la donación, y con la aprobación expresa de ella y del contenido todo de la escritura por el Sr. Gobernador, Provisor y Vicario General del Obispado más arriba nombrado, firmándola todos con el escribano y testigos.

6.º

**Extinción de la congregación.**

Así creada en Málaga y en posesión y disfrute de la iglesia y del caudal la Congregación de clérigos del oratorio de San Felipe Neri citada, sobrevino, casi cien años después, la profunda y radical novedad traída por las leyes y demás disposiciones de exclaustración, extinción de monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de uno u otro sexo y de incautación y venta por el Estado de sus bienes, así como de los del clero secular, declarados nacionales, que culminaron en los años 1,836 y 1,837.

De presumir es que, si no ya algunos de los que precedieron, se considerasen aplicables a aquella congregación el Real Decreto de 19 de febrero y el Decreto de las Cortes de 8 de marzo de 1836, el de 28 de julio de 1,837 (ley de 26-28 de julio del mismo año) y la ley de 24-29 de julio también del mismo año del departamento de Hacienda; pero probado está que ciertamente se le aplicó la decisiva y radical ley de 22-29 del mismo julio de 1,837, de extinción de congregaciones en general e incautación y privación de sus bienes (asignados en su artículo 20 para la caja de amortización de Deuda). Por modo auténtico, aparece referido en la certificación del Registro de la propiedad que acompaño con el número 1 y a que más detalladamente aludiré luego. (La inscripción a que se contrae es ya conocida de la Junta provincial y del Ministerio, donde obra otra certificación de ella traída a este expediente).

**Incautación por el Estado.**

Es su virtud, pues, cesó y desapareció en Málaga, como habría de suceder en toda España, la mencionada congregación de filipenses; de todos sus bienes, a excepción de la iglesia y sus accesorios, que se entregaron a la autoridad eclesiástica, se incautó el Estado, como nacionales, tal vez vendió éste alguno y hubiéralos vendido todos, pereciendo en aquel trance el caudal, del que solo en empolvados archivos quedaría hoy recuerdo, de no haber mediado las prudentísimas medidas y las felices gestiones salvadoras que paso a decir.

7.º

**Destinación de los bienes al Instituto de 2.ª Enseñanza.**

Frente a tal derrumbamiento de las Congregaciones de regulares y aun de clérigos seculares, a su prohibición y la de toda posible propiedad inmueble para los mismos y aun para parroquias y obispados (salvo iglesias catedrales, parroquiales o ayudas de parroquias, el palacio de

cada prelado, rectorías, seminarios conciliares con sus huertas y jardines, etc.) los señores Obispo y Patrono, bien fuera después de haber hecho sin resultado los llamamientos previstos o bien sin ellos ante la imposibilidad y la realidad incontrastables creadas por aquel estado legal, a la par que lograban la conservación de la iglesia para el culto público, como parroquia, hicieron, por fortuna (por inspiración providencial cabe decir), uso del sagrado mandato recibido en la parte final de la cláusula Décima de la escritura fundacional; y, haciéndolo con manifiesto acierto en el sentido más viable y adecuado dadas las circunstancias, *decidieron de plena conformidad que los bienes de que se trata* (según la escritura había de entenderse y se entendió lo mismo los en ella donados que los demás adquiridos por la Congregación) *se destinaran al Instituto de segunda enseñanza de esta ciudad, a cuya disposición debían dejarse.*

Para la inconcusa certeza de este hecho poco importa que aparezca o no el documento original en que así lo declararon (al que también alude la orden que obra en este expediente dada el 27 de noviembre de 1,928 por el Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza superior y secundaria a esta Junta provincial, de la que aparece que al tiempo de aquella declaración era Patrono el marqués de Bendaña); *porque solemnemente lo afirma la importantísima Real orden que citaré y transcribiré* en los dos hechos siguientes, de donde es de colegir que aquel documento quedó en el Ministerio de Hacienda en el expediente resuelto por la misma.

8.º

**Reivindicación  
de bienes para el  
Instituto.**

Con efecto; estéril habría sido en la práctica aquella loable decisión de Prelado y Patrono por sí sola; pues que el Estado, desconocedor de ella o a falta de reclamación de parte, habíase incautado, como va dicho, de los bienes y en definitiva se los habría apropiado o habríalos vendido como cualesquiera otros procedentes de congregaciones.

No sucedió así, gracias a gestión de la Diputación provincial de Málaga y a la justa soberana disposición dictada en el expediente que siguiera. Véase cómo lo dice la adjunta certificación número 1: «El Estado »en la creencia de que estos bienes eran nacionales se incautó de ellos en »virtud de la ley de desamortización del año mil ochocientos treinta y siete »referente a las Comunidades de religiosos; mas como la condición—alude »a la Décima—que el don Tomás Guerrero de Coronado y Zapata consignó »en la escritura de cesión no permitía que estos bienes se calificaran como »de Comunidades de Religiosos, a instancia de esta Diputación provincial »se instruyó en el Ministerio de Hacienda el oportuno expediente que dió »por resultado la Real orden que literalmente transcrita dice así». (Vamos también nosotros a invocarla y transcribirla, bien lo merece, en párrafo especial: el que sigue).



**R. O. de Hacienda de 6 de abril 1848 declaratoria del derecho de este Instituto.**

La Real orden del Ministerio de Hacienda de seis de abril de mil ochocientos cuarenta y ocho comunicada al de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (y trasladada el 28 del mismo mes por la Dirección General de Instrucción Pública a la Junta inspectora de este Instituto, que a su vez la trasladó al Sr. Intendente de rentas de esta provincia), resolviendo el indicado expediente, sancionó y declaró del modo más solemne y definitivo el derecho del Instituto a los bienes de que se viene hablando y formalmente mandó entregárselos. Tomado del traslado inserto en la adjunta certificación número 1, he aquí su texto:

«Junta Inspectora del Instituto de Málaga.—Con fecha de veinte y ocho de abril último el Sr. Director General de Instrucción pública, dice a esta Junta lo que copio.—Con fecha seis del corriente dice el señor Ministro de Hacienda al de Comercio, Instrucción y obras públicas lo que sigue:—EXCELENTISIMO SEÑOR: SE HA ENTERADO LA REINA DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ESTE MINISTERIO A CONSECUENCIA DE DIFERENTES COMUNICACIONES DIRIGIDAS POR EL DEL CARGO  
»DE V. E. RECLAMANDO LOS BIENES PROCEDENTES DE LA SUPRIMIDA CONGREGACION DE SAN FELIPE NERI DE MALAGA PARA  
»DOTACION DEL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEMANZA DE LA MISMA CIUDAD, Y CONFORMANDOSE S. M. CON EL PARECER DE LA  
»DIRECCION DE FINCAS DEL ESTADO Y SU ASESOR SE HA SERVIDO  
»DECLARAR QUE LOS REFERIDOS BIENES SE HALLAN COMPRENDIDOS  
»EN EL ARTICULO VEINTE Y UNO DE LA LEY DE VEINTE Y NUEVE  
»DE JULIO DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE, PORQUE LA  
»DONACION QUE DE ELLOS HIZO EL CONDE DE BUENAVISTA A LA  
»CONGREGACION FUE CON LA CONDICION DE QUE SI ESTA DEJABA  
»DE EXISTIR SE APLICASEN AL OBJETO QUE DISPUSIERA EL REVERENDO OBISPO DE AQUELLA DIOCESIS Y EL PATRONO, QUIENES  
»HAN MANIFESTADO ESTAR CONFORMES EN QUE SE DESTINEN AL  
»INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEMANZA, A CUYA DISPOSICION DEBEN  
»DEJARSE. Lo que de Real orden comunicada por el expresado señor Ministro digo a V. S. para los efectos consiguientes, debiendo V. S. dar cuenta a esta Superioridad luego que se entregue al Instituto en los referidos bienes.»

Claro es que dicha Real orden debe obrar, original o por traslados, en los Ministerios respectivos; (Hacienda e Instrucción pública) mas, para el caso, abastece sobradamente su literal inserción en la solemne inscripción del Registro de la propiedad certificada en el tan aludido documento adjunto número 1; registro en el cual quedó también archivada aquella, como la certificación expresa.

10.º

**Solemne entrega y posesión de bienes al Instituto.**

Hay más. De modo también solemne y acabado se hizo la entrega y dióse al Instituto la posesión de aquellos bienes. Ya al trasladar la Real orden al señor Intendente de Rentas públicas de esta provincia la Junta Inspectora del Instituto, añadía según se lee en el mismo documento número 1: «En su consecuencia en sesión celebrada en el día de hoy ha con-  
»venido se comuniqué a V. S. y a fin de que teniendo cumplido efecto la  
»disposición arriba inserta ha nombrado a los señores don Joaquín María  
»Canales, don Francisco Genistróni y don Joaquín María Díaz García  
»individuos de su seno para que en su representación y asociados del  
»Director y Depositario del Instituto se incauten y tomen posesión del  
»indicado caudal que perteneció a la extinguida congregación de San  
»Felipe Neri de esta ciudad. Dios gue. a V. S. ms. as. Málaga cinco de  
»Mayo de mil ochocientos cuarenta y ocho. Presidente, Miguel Tenorio:  
»J. M. Díaz García=Señor Intendente de Rentas de esta Provincia.»

Así, por orden del Sr. Intendente, en cumplimiento de dicha Real orden de seis de abril, se llevó a efecto en cinco de mayo de mil ochocientos cuarenta y ocho mediante acta en la cual, según uso y costumbre de la época dióse al Instituto, representado por su Junta Inspectora y por el Director y el Depositario «posesión real corporal, actual *vel cuasi*» en una de las casas «*en representación del referido caudal.*» De tan interesante documento, también mencionado en la certificación número 1 y según ella expresa archivado en el Registro de la propiedad, presento certificación expedida por el mismo, con el número 2.

11.º

**Exclúyese la iglesia erigida en parroquia.**

Quedó al margen de todo ello (viene ya insinuado) la iglesia con sus accesorios, de que se había hecho entrega a la autoridad eclesiástica por haber sido erigida en parroquia, como lo es hoy, bajo la misma advocación, que conserva, de San Felipe Neri. Fácil será siempre la prueba de tan notorio hecho, que de momento no me incumbe.

12.º

**Pacífica posesión durante 80 años.**

Como tal dueño efectivo y sin contradicción alguna siguió este Instituto poseyendo desde el citado año 1,848 los bienes que por el tan solemne título ya dicho—la R. O. de 6 de abril de aquel año o por canje o acrecimiento de ellos, vinieron a su dominio y posesión, siendo de advertir al respecto, según muy fidedignas referencias aunque sin dato exacto a la vista, que si bien en la posesión dada en 5 de mayo de aquel año 1,848 el Instituto recibió buena cantidad de inmuebles y censos además de las fincas primitivamente donadas por el fundador a los filipenses (con las

**Permutación forzosa por desamortización civil.**

que, como adquiridos por ellos, debían englobarse según la escritura) y ningunos valores mobiliarios, posteriormente el Estado, por obra de la ley desamortizadora en lo civil de 1.º de mayo de 1,855, hubo de imponerle la permutación forzosa de casi la totalidad de las fincas y censos del caudal en inscripciones intransferibles de la deuda pública, que le fueron más tarde entregadas, representativas del valor de aquellos con intereses y hechas en cambio las deducciones legales; valores quizá incrementados luego, por acumulación e inversión de rentas, con otros diversos, resultando de todo ello lo que en cuanto a bienes actuales se dirá en los hechos 15.º y 16.º de este escrito.

13.º

**Percibo e ingreso de intereses o rentas.**

Los intereses o rentas de esos bienes los percibió siempre por sí, sin dificultad, el mismo Instituto de segunda enseñanza, si bien al pasar a depender directamente del Estado el sostenimiento de los Institutos provinciales en el año 1,887 se dispuso que los ingresara en el Tesoro, como así lo cumplió desde entonces, pero sin dejar de ser ni un momento el Instituto mismo quien, por sí, los percibía, cobrando, por tanto, en la Sucursal del Banco de España en esta plaza los de los valores en él constituidos o depositados según luego se detallará. Así continuaron las cosas hasta acaecer lo que en el siguiente número se consigna.

14.º

**Cambio en dicho ingreso.**

En 1,928, con motivo de haber solicitado la Dirección de este Instituto de ese Ministerio de Instrucción Pública autorización para aplicar directamente parte de dichas rentas a adquisición de material con destino a clases prácticas y a las permanencias de estudiantes, se le previno por orden del Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Superior y secundaria de 4 de setiembre de aquel año comunicada por la Junta provincial, que se abstuviera de hacer gastos con cargo a las mentadas rentas y que no las ingresara en Hacienda, a lo cual se atuvo.

**Propuesta por la Junta provincial.**

Simultáneamente la Junta provincial al informar sobre ello a la Superioridad sugirió «que se tenían noticias particulares de que parecía tratarse de una institución benéfico-docente, por lo que creía necesario y de urgencia la incoación del oportuno expediente para averiguar la representación legítima de la fundación, creyendo que el Instituto de Málaga no tenía justo título ni derecho alguno para retener el capital de la misma» y pidiendo—la Junta—el patronato interino para, por este medio, llegar en su día a la clasificación de la obra pía «que se halla—decía—muy abandonada por ignorarse su representación legítima y no poder cumplir sus fines, que se desconocen». (Así lo relata el resultando tercero de la Real orden de 25 de setiembre último en este expediente).

**Medidas del Protectorado.**

**R. O. 17 junio 1929.**

**La Junta provincial patrono interino.**

Tal sugerencia determinó (todo ello sin duda por olvidar la R. O. de 6 de abril y el acta de posesión de 5 de mayo de 1,848 y el estado de derecho de más de tres cuartos de siglo por ellas creado) que la Seperioridad, tras algunos trámites, adoptara medidas encaminadas a lo propuesto por la Junta, dándose al efecto la Real orden de 17 de Junio de 1,929 que dispuso: 1.º Nombrar patrono de la fundación «Caudal de San Felipe Neri», con caracter circunstancial e interino, a esta Junta provincial de Beneficencia con el objeto principal de que persiguiendo la regularización de la Obra Pía continuase activamente las gestiones para la aportación, si se comprobase su existencia, de documentos públicos o privados que hagan relación a la citada Obra Pía anteriores— así dice— a la escritura de donación otorgada por el Excmo. Sr. don Antonio Tomás Gurrero de Coronado y Zapata, conde de Buenavista, en 5 de julio de 1,739.—2.º Que asimismo investigase el Patronato el total del capital que a la fundación corresponda y 3.º Que dicho Patronato haciendo uso de las autorizaciones que concede la R. O. de 11 de noviembre de 1,926 procediera a la reclamación y cobro de las rentas pendientes y de las que en lo sucesivo produzcan los bienes fundacionales, conservándolos en depósito hasta que por el Protectorado se resolviera en definitiva.

**R. R. O. O. 7 agosto y 25 setiembre 1929.**

Confirmaron esta resolución posteriores reales ordenenes de 7 de agosto y 25 de setiembre del mismo año 1,929, que resolvieron que, sin perjuicio de conservar el Instituto en su poder los resguardos de los depósitos de valores, el pago interino de sus intereses se hiciera directamente a la Junta, pudiendo serlo en cuenta corriente especial a nombre de la misma en esta Sucursal del Banco de España, en la cual cuenta los conservaría como tal depósito.

**Reserva de derechos del Instituto.**

**Cobro de intereses por la Junta. Premio.**

Contra todo ello, dado su esencial carácter provisional e interino, no podía la Dirección de este Instituto oponer otra cosa que la respetuosa salvedad o protesta de derechos del mismo, que expresamente consignó en sus oficios o comunicaciones; y así, cumpliendo lo dispuesto, la Junta provincial percibió y sigue percibiendo mediante abono directo en dicha cuenta en el Banco, los intereses a la sazón devengados y los posteriores, de los valores de que se trata, habiéndosele posteriormente, por Real orden de 29 de marzo último, reconocido un premio de administración de diez por ciento.

Todo ello, con más detalle, consta en este expediente o en la Superioridad.

15.º

De dos clases son los bienes pertenecientes hoy al Instituto procedentes del caudal en cuestión: valores mobiliarios y bienes inmuebles.





A inmuebles dedicaré el siguiente número; el presente a los valores mobiliarios.

### Valores mobiliarios.

Tocante a éstos, es de reiterar aquí la fundamental distinción ya formulada en las comunicaciones de esta Dirección a la Junta provincial de Beneficencia y singularmente en su oficio de 23 de julio de 1,929 en la relación de valores del 30 y en el acta firmada en 31 del mismo mes, cual consta todo en el expediente. Valores hay, en efecto, que viniendo mencionados en algún modo como procedentes de aquel caudal, no ofrecen dudas a tal respecto; hay otros, en cambio, que, adscritos hace tiempo a este Instituto sin referencia alguna a dicha procedencia, *pudieran* acaso provenir de igual origen por inversión de rentas, como pudieran tener otro, sin que, por tanto, quepa asimilarlos a aquellos *a priori*, y respecto de los segundos dijo esta Dirección en todos esos documentos y ahora repite que su mención y el acatamiento dado al cobro, aun interino, de sus intereses por la Junta provincial tienen especial carácter de *ad cautelam*, por si al fin se declarase o reconociere su procedencia del mismo caudal, y con salvedad, por tanto, más expresa si cabe, de cualquier distinto derecho sobre los mismos. Así advertido, paso a mencionarlos todos con igual distinción que lo fueron en dichos documentos.

*GRUPO A. Valores que contienen alguna indicación de pertenecer al citado caudal:*

a). A nombre de «Colegio de San Felipe Neri de Málaga».—Una inscripción intransferible de la Deuda perpetua interior al 4% número 712 de pesetas nominales 243,485'59.

b). A nombre de «Caudal de San Felipe Neri, hoy Instituto de 2.<sup>a</sup> enseñanza (Málaga).»

Otra inscripción intransferible de la misma deuda distinguida con el número 711 de pesetas nominales 156,247'63.

Dichas dos inscripciones, juntamente con la que se dirá en el apartado a) del siguiente grupo B, se hallan constituidas en la Sucursal del Banco de España en esta ciudad en depósito intransmisible por endoso según resguardo número 3,406 expedido el 8 de julio de 1,927 a favor del «Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga.»

*GRUPO B. Valores que figuran lisa y llanamente a nombre del Instituto:*

a). A nombre de «Instituto de Segunda Enseñanza de Málaga».

Una inscripción intransferible de la Déuda perpétua interior al 4 0/0 distinguida con el número 710 de pesetas nominales 320,106'55.

Está depositada en la citada Sucursal del Banco de España a nombre del «Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga» bajo el mismo resguardo dicho al final del anterior grupo A.

b). A nombre de «Instituto Nacional de 2.<sup>a</sup> Enseñanza».

Diez y ocho acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos de quinientas pesetas nominales cada una en junto nueve mil, distinguidas con los números 118,979 al 118,996 inclusive, constituidas en la citada Sucursal del Banco de España en depósito transmisible por endoso según resguardo de 18 de noviembre 1924 número 61,967.

c). A nombre de «Instituto de segunda enseñanza de Málaga.

Setenta y seis acciones nominativas del Banco de España de quinientas pesetas nominales cada una, en junto 38,000 pesetas nominales, de las cuales acciones:

64 con carácter de libres aparecen comprendidas en un extracto de inscripción número 621 (folio 50 del registro de Málaga) expedido en Madrid a 13 de Noviembre de 1,924 y distinguidas con los números 627 y 628—19,164 y 165—22,818 a 820—61,922 y 923—62,770 a 773—64,944 a 946—68,473 a 476—71,533 a 537—77,697 a 702—95,993—105,952 a 954—111,587 a 590—141,587 a 596—195,182—246,429 a 438—256,847 y 279,714 a 716; y

12 lo están en otro extracto de inscripción, con indicación «no disponible» número 4,630 (folio número 162 del registro de Málaga) expedido en Madrid el 4 de mayo de 1,922 y distinguidas con los números 345,652 a 663.

Se advierte que las fechas de esos resguardos o extractos resultan modernas por proceder de sustitución o canje de otros antiguos agotados en la estampación de cajetines de pago de intereses.

#### 16.º

#### Inmuebles.

Dos, únicamente, son los inmuebles procedentes del caudal de la suprimida congregación de San Felipe Neri, pertenecientes hoy a este Instituto de Segunda Enseñanza y por él poseídos.

#### Edificio Instituto.

A. El edificio distinguido con el número uno moderno en la calle de Gaona de esta ciudad, que fué el que como casa principal mencionaba en la escritura de donación el conde de Buenavista, después convento de la Congregación donataria y desde la cesión al Instituto de Segunda Enseñanza el local en que el mismo está instalado, siendo de advertir:

#### Inscripción.

a). Que lo que tiene este Instituto inscrito a su nombre, *en pleno dominio* en el Registro de la propiedad de este partido, *hace más de cincuenta y ocho años* (desde el 31 de enero de 1,872), por la inscripción primera del número 1,367, obrante al folio 153 del tomo 182, que continua vigente, acreditándolo la tan aludida certificación acompañada a este escrito con el número 1.

#### Cargas.

b). Que en dicho registro aparece libre de toda carga, cual ya lo dice la citada inscripción primera y lo corrobora, al día de hoy, la certificación que acompaño con el número 3.



c). Que, no obstante, se paga un censo sobre el mismo edificio de cuarenta y ocho reales de réditos ánuos a favor del Sr. Conde de las Navas (censo que no es ninguno de los mencionados en las escritura de 1,739), por haber ordenado el Ministerio de Hacienda en R. O. de 7 de diciembre de 1,918 que se le tuviera por vigente y pagadero (aunque sin título inscrito) sobre la «casa número 1 de la calle de Gaona que pertenece al Instituto provincial de 2.<sup>a</sup> enseñanza» de esta capital.

**Parte de casa  
n.º 7 calle de la  
Victoria.**

B. Una participación, que viene figurando en dos quintas partes (aunque antiguamente dijérase tres) en la casa número 7 en calle de la Victoria, no inscrita a favor del Instituto en el moderno Registro de la propiedad, en el cual por la inscripción cuarta del número 1,103 aparece dicha finca inscrita a nombre de don Francisco Domínguez Navarro solo en cuanto a tres quintas partes, si bien es de advertir que en la inscripción primera, extendida el 27 de diciembre de 1,872 al folio 120 del tomo 197 al describir el inmueble dice «que las otras dos terceras partes de casa pertenecen al Instituto de 2.<sup>a</sup> enseñanza de esta capital.»

De hecho el coopropietario, incluso el actual Sr. Domínguez, vino siempre pagando al Instituto la parte de renta correspondientes a las dos quintas partes y últimamente, por haber suprimido ese pago, demolido y reconstruida la finca dicho Sr. Domínguez, surgieron incidencias con él, que no precisa relatar aquí y ventila hoy, por razón de su patronato interino, la Junta provincial de Beneficencia, que pidió y le han sido entregados cuantos documentos o antecedentes poseía y encontró esta Dirección relativos al caso.

## Fundamentos de Derecho

### I

**Propiedad y posesión.**

Desde las leyes de las Siete Partidas hasta el vigente Código civil, pasando por las constituciones políticas y demás leyes españolas que a ello han tocado o tocan y han regido desde la ya antigua fecha de que arrancan el dominio y la posesión de este Instituto en los bienes de que se trata o rijen hoy, téngase por invocados aquí, excusando empachosa cita, cuantos textos de ellas y doctrina legal confirmatoria han consagrado en nuestro país el derecho de propiedad y legítima posesión, garantizando contra su despojo o ilegal privación; pues que bien notorios y robustos son y como tales deben respetarse el derecho de propiedad y la consiguiente posesión legítima que este Instituto alega y defiende en orden a los bienes en cuestión.

### II

**Título.**

Extinguida la Congregación filipense y privada del dominio y posesión de sus bienes por las disposiciones legales citadas en el hecho 6.º de

este escrito (cita que damos por reproducida aquí) vino a ser y es título perfecto de dominio a favor de este Instituto (sobre el antecedente inicial de la escritura de 1,739 y el estado de hecho y de derecho por aquellas disposiciones creado) la aplicación de los bienes hecha al mismo por el acuerdo de los Sres. Obispo y Patrono y confirmada por la Real orden de Hacienda de 6 de abril, comunicada por Instrucción pública, y el acto de posesión de 5 de mayo de 1,848 (hechos 7.º al 10.º). (Siempre que así digamos, sin más, entiéndase que nos referimos a los hechos numerados en la primera parte de este escrito).

Lo fué y es, porque aquella decisión del Prelado y el Patrono basóse en facultad y solemne mandato recibidos en la cláusula Décima de la escritura, que habían de cumplir *según mejor vieran*, y porque la Real orden respetó y confirmó tal decisión. Nadie, serenamente, podría dudar del acierto y la prudencia notorios que a ella presidieron, luego de salvar la iglesia para el culto como parroquia (piadoso era además, suprimidas las congregaciones, fomentar la enseñanza, no olvidando que el que en ella rectamente labora, ora); pero, de cualquier modo, nadie podría hoy discutirlo, porque *la Real orden, por nadie impugnada jamás, quedó firme desde el primer momento y se ejecutó con la posesión solemne-mente dada en su cumplimiento y a partir de eso, ella, la Real orden, fuera o no deficiente (fué perfecto) el acto invocado de Prelado y Patrono, bastaría como verdadero título plenamente eficaz a favor de este Instituto; porque el Ministerio de Hacienda, tratándose de bienes desamortizados de suprimidas Congregaciones, era el Estado mismo, en nombre de éste disponía de los bienes incautados y el reconocimiento que prestó al derecho del Instituto y la entrega que le hizo por mediación del Intendente provincial que a dicho Ministerio representaba (hecho 10.º), fueron cosa tan legal en aquel momento y a través del tiempo transcurrido tan inatacable hoy que nadie podría desacatarla, menos que nadie, claro es, el Gobierno español en ninguno de sus departamentos ministeriales.*

### III

#### **Confirmaciones.**

Nuevo reconocimiento y expresa confirmación por el Gobierno del derecho de este Instituto fué más tarde la permutación forzosa de fincas de aquella procedencia en inscripciones de la Deuda pública, por obra de la desamortización de bienes de corporaciones civiles dispuesta por ley de 1.º de mayo de 1855. Sabido es que tal desamortización, a diferencia de la de 1836 y 1837 (que fué sin derecho a indemnización) lejos de negar, suponía el derecho de propiedad sobre los bienes, imponiendo la permutación por un principio de expropiación forzosa por utilidad pública. Luego el Estado no pudo expedir o entregar las inscripciones sino a quien reconociere como legítimo dueño de los bienes permutados. Y véase, al propio tiempo,

cómo de acto solemne y firme del poder público nace o arranca también el dominio del Instituto en los valores mobiliarios que posea realmente procedentes del mencionado origen.

Y fué otra confirmación más, entre otras muchas, la declaración del mismo Ministerio de Hacienda en 1,918 relativa al censo de que se habla en el apartado c) del epígrafe A. del hecho 16.º, sobre el edificio número uno en la calle de Gaona, edificio que pertenece—dice aquél— al Instituto provincial de 2.ª enseñanza.

#### IV

#### **Prescripción.**

Una perfecta, bien ganada y supercorrida prescripción, pondría siempre además al derecho alegado un sello de firmeza e indisputabilidad tales, que, ante ello, sería incluso pérdida de tiempo divagar acerca del título, porque tal es aquella, que hasta este (tan perfecto de suyo en este caso) holgaría.

A este respecto es de recordar que, según los artículos 1,931 y 1,932 del Código civil, la prescripción produce sus efectos a favor y en contra de toda clase de personas, incluso las jurídicas, y según el 1939 la comenzada antes de la publicación del código se regiría por las leyes anteriores al mismo, pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriera todo el tiempo en él exigido por la prescripción surtirá ésta sus efectos aunque por dichas leyes anteriores se requiera mayor lapso de tiempo.

Distingamos, pues, dos periodos: uno desde la solemne entrega y posesión de bienes en 5 de mayo de 1,848 (hecho 10.º) hasta el 1.º de mayo de 1,889, en que entró en vigor el código, y otro desde entonces al 4 de setiembre de 1,928, si por interrupción en la posesión se tomaran las medidas del Protectorado indicadas en el hecho 14.º (no lo son, por su mero carácter indagatorio e interino y conservar en su poder el Instituto fincas, títulos o resguardos de depósitos, etc.). Abarcando el primer periodo *cuarenta y un años menos cuatro días* y el segundo *más de treinta y nueve años*, resultará que antes del código civil tenía ya bien ganada el Instituto y después de él habría asimismo ganado, si antes no la tuviera:

A. En cuanto a inmuebles, no sólo la prescripción ordinaria, tan del caso por posesión con justo título y buena fé, de diez años entre presentes y veinte entre ausentes (ley 18 del título 29 de la Partida 3.ª y artículo 1957 del código civil) sino hasta la extraordinaria por posesión de treinta años, que ninguna otra condición exige. (Ley 19 del mismo título y Partida citados y artículo 1,959 del código civil).

B. En cuanto a muebles, no sólo la ordinaria de tres años (ley 9.ª del mismo título y Partida citados y artículo 1,955 del código), sino también

la extraordinaria de seis, que fija el mismo artículo.

Todo ello ganado con notorio exceso.

Tras lo cual ociosa sería detallada exposición de jurisprudencia confirmatoria, que aun por lo anterior al código civil, época de menos generalidad y fijeza en ello, puede encontrarse en Sentencias, entre otras muchas, del Tribunal Supremo de Justicia de 22 de noviembre de 1,860, 4 de octubre de 1,862, 15 de junio, 28 de setiembre y 14 de octubre de 1,864, 14 de febrero y 5 de mayo de 1,865, 25 de enero y 12 de mayo de 1,867, 27 de marzo, 3 y 7 de abril de 1,868, 9 de junio y 28 de octubre de 1,870 y 8 de marzo de 1,886.

## V

### Otras garantías.

Levisima indicación (sin descender a innecesaria minuciosa cita) basta a recordar también en cuanto al edificio Instituto en la calle de Gaona, inscrito en el Registro de la propiedad hace más de cincuenta y ocho años, las preeminencias y garantías que concede la ley hipotecaria, y en cuanto a inscripciones nominativas de deuda pública, de acciones del Banco de España, depósitos, etc. las que igualmente les otorgan las disposiciones legales y especialmente los estatutos del citado Banco nacional; por lo que todo ello está colocado bajo la salvaguardia de los Tribunales de justicia.

## VI

### Ingreso en Hacienda.

No enervan nada de lo dicho la mera modalidad introducida por la ley de Presupuestos del Estado de 29 de junio de 1,887, por la que el sostenimiento de los Institutos pasó de las provincias al Estado, o cualquiera otra disposición dictada en ejecución de ello. Dicha ley, al obligar en su artículo 7.º a los Institutos a ingresar «en el Tesoro *por formalización*» el importe de las rentas que por *bienes propios disfruten* los mismos «establecimientos...» no hizo más que eso; introducir una *modalidad*; no derogó en modo alguno el tradicional principio del derecho de éstos a adquirir y poseer bienes propios, administrándoselos, y aplicar sus productos a sus necesidades, que venía reflejado entre otras disposiciones en los artículos 118 y 121 número 1.º de la ley de Instrucción Pública de 9 de setiembre de 1857, en los 54 n.º 1.º, 55 n.º 5.º, 56, 59 y 60 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de mayo de 1,859, en los 101 y 102 del de Instrucción pública de 20 de julio del mismo año 1,859, en el 3.º del Real decreto de 30 de abril de 1,886, en la Real orden de 29 de setiembre de 1,886 (que prohibió a las Diputaciones llevar, como algunas pretendían, esos ingresos con otros a una caja común «porque—decía la Real orden—según la legislación de Instrucción pública deben conservarse en las cajas» de los Institutos los fondos que éstos recauden con el fin de aplicarlos

»directamente a satisfacer sus atenciones)», a todo lo cual prestó nueva y expresa confirmación dicha ley de 29 de junio de 1,887 cuando a las palabras ya copiadas añadió *«continuando estos bienes administrados como en la actualidad por los Directores de los Institutos, pero bajo la inspección del Estado.»*

## VII

### Falta el supuesto básico del expediente.

Con lo dicho pudiera en rigor darse por conclusa la fundamentación de nuestro alegato, por cuanto recuérdese bien que en este expediente los títulos que invocamos *no han sido por nadie atacados, ni tildados siquiera de deficientes*, sino tal vez desconocidos u olvidados y así las sugerencias de la Junta provincial y las medidas de que se habla en el hecho 14.º arrancaron de haber manifestado aquella «la creencia de que el Instituto de Málaga no tenía justo título ni derecho alguno para retener el capital», con los demás allí acotado, error en que, de buena fé, claro es, pudo incurrir entonces no estudiado el asunto, pero que destruido viene ya y noblemente rectificará ahora, sin duda, a la vista la Real orden y el acta de posesión de 1,848. A todo su valor legal suma, por cierto, dicha acta la circunstancia de que a uno de sus principales firmantes y muy distinguido, don Joaquín M.<sup>a</sup> Díaz García, deba el ser, y, por tanto, los mayores respetos a su memoria, un no menos distinguido y competente miembro hoy de la Junta provincial de Beneficencia.

Sin embargo, en la defensa, que nos está encomendada, del derecho del Instituto, queremos no dejar de considerar aspecto alguno importante, y proseguimos.

## VIII

### Concepto del dominio y posesión de los bienes.

Indiscutibles ya dominio y posesión, veamos el verdadero concepto jurídico en que se dan en este caso.

Pertenecen los bienes al Instituto de segunda enseñanza en pleno y absoluto dominio: son *suyos* como pudieran serlo cualesquiera otros legítimamente adquiridos (aunque en cualquier momento, no bien estudiando el asunto, no se hubiera acaso interpretado así incluso por sus Directores). Recuérdese cómo la Real orden de 1,848, al confirmar el acto de los Sres. Obispo y Patrono, mandó entregarlos al Instituto de segunda enseñanza *a cuya disposición deben dejarse*.

Y así debía ser. La fundación hecha por el conde de Buenavista en la escritura de 1,739 fué primordialmente *religiosa* y duró mientras duró la Congregación donataria. Donábase a los Padres del oratorio de San Felipe Neri para que *en la iglesia «practicasen su sagrado instituto»*. Así aparece al principio de la escritura y no se dice más. Es de recordar, pues, que dicha congregación, instaurada primeramente en Italia por el llamado



apóstol de Roma San Felipe Nerí, organizada formalmente en 1,575 por el Pontífice Gregorio XIII y aprobadas sus constituciones por Paulo V en 1,612 era de clérigos seculares, que se dedicaban a la santificación propia y de los demás, principalmente esta por la cura de almas, por medio de sermones, conferencias y enseñanza del catecismo. Por otra parte repásese la escritura de 1,739 y, fuera de advertencias sobre censos u otros derechos ya extinguidos hoy o sobre fincas vendidas más tarde por el Estado, no se encontrará (aparte del sostenimiento de la Congregación, fin implícito) obligación alguna a cumplir que no vaya referida al culto y uso de la iglesia y a la sucesión en ella.

Fenecida la congregación filipense, no puesta otra en su lugar, convertida la iglesia en parroquia y transferidos los demás bienes a este Instituto de segunda enseñanza según va visto, la fundación terminó, *por lo menos en cuanto a tales bienes.*

**No hay fundación hoy.**

No nos toca definir si también en lo meramente religioso, por la transformación de la iglesia en parroquia, o si en ella será de cumplir en lo posible todo aquello de ese orden que el fundador ordenara. Incumbiría en su caso canónicamente o en conciencia resolver de ello y cumplirlo o hacerlo cumplir a la autoridad eclesiástica y a quien tenga y rija la iglesia (que como parroquial tiene sus ingresos), si bien está a la vista y justo es decirlo que así se efectúa en lo esencial para gloria de Dios y del santo titular San Felipe y haciendo ello honor al probado celo de dicha Autoridad y de los dignos párrocos que se han sucedido en la citada iglesia, en la que no sólo se practica la cura de almas, tan inherente a toda parroquia, y otros actos piadosos, sino que subsiste allí la V. O. T. de Servitas, que recomendara instaurar en ella la cláusula Décima-cuarta de la escritura. Si olvidados estuvieren acaso los sufragios dispuestos en la Octava (dos oficios cada año de vigilia y misa cantada de requiem) podrá recordarlos en buen hora, si lo cree oportuno, la autoridad eclesiástica al párroco, como holocausto de la parroquia a la memoria de quien con espléndidez erigió y alhajó el templo, que gratuitamente vino, entre 1,837 y 1,848 a convertirse en parroquial.

Pero en cuanto a los demás bienes ¿qué duda cabe de que, cedidos como fueron a este Instituto de segunda enseñanza genéricamente *para su dotación*, según rezan la Real orden y el acta de posesión de 1,848, sin condición alguna, no hay ya fundación sino que terminó por cumplimiento de condición resolutoria, implícita en la parte final de la cláusula Décima puesta por el fundador y aplicada, según mejor vieron, como sus mandatarios, por los Sres. Obispo y Patrono? De no entenderlo así ¿cuáles serían a partir de entonces, en cuanto al Instituto, los *especiales* fines de la fundación perfectamente determinados, cuáles las cargas a levantar igualmente expresas, que permitieran encajarla en la definición de las

benéfico-docentes que dá el artículo 2.º del Real decreto de 27 de setiembre de 1,912? Ningunos, y por eso se dá el caso muy de subrayar, de que la digna Junta provincial al imputarle que no cumplía los fines de la fundación hubiera de añadir «que se desconocen». (Hecho 14.º)

De todo lo cual resulta, pues, patente que lo único aplicable al caso, en lo que al Instituto se refiere, en toda la actual legislación sobre Protectorado benéfico-docente, serían, a lo sumo, los artículos 12 y 15 del R. D. de 27 de setiembre de 1,912 y 2.º de la Instrucción de 24 de julio de 1,913, a cuyo tenor toda intervención del mismo Protectorado debe cesar en absoluto visto y conocido que ya en 1,848 quedó cumplida la voluntad del fundador, interpretada por sus mandatarios al efecto y aceptada y confirmada por el Gobierno de S. M., mediante la cesión y formal entrega de los bienes de que se trata al Instituto de segunda enseñanza de Málaga de una vez y para siempre, «para su dotación, dejándolos a su disposición» sin condición alguna.

Elocuente corroboración de todo ello es que jamás nadie a calidad de Patrono de familia (aunque la del fundador conservó siempre y tiene en Málaga bienes y administración) haya intentado volver sobre aquel acto, ni el otorgamiento de la nueva escritura a que alude el final de la cláusula Décima-Tercera de la fundacional, ni inmiscuirse lo más mínimo en el caudal; porque con aquel acto el Patronazgo familiar conceptuó, muy atinadamente, terminada su misión en orden al mismo.

Y no se arguya que en la mente del fundador una cosa (la iglesia) era inseparable de la otra (los demás bienes). Sobre lo extemporáneo y trasnochado ya hoy de toda discusión acerca de ello, está la realidad indestructible creada por aquellas leyes exclaustradoras y desamortizadoras y otras posteriores. La separación se impuso y habría sido siempre un hecho inevitable: sólo que por haber ido los bienes a este Instituto, organismo docente, se salvaron y conservan más o menos transformados, y de no haber sido así hubiéranse confundido en el común acervo de los llamados bienes nacionales y corrido la suerte de ellos. Lo único imposible en todo caso es que siguieran anejos a la iglesia, ni aun como parroquial. Ni razón de ser tendría siquiera hoy, a ella aplicado, un caudal que respondía y con creces abastecía en su origen al sostenimiento de toda una congregación.

## IX

### **Hipótesis de fundación.**

Sí, no obstante cuanto vá dicho, prevaleciere la hipótesis de subsistencia de fundación u obra pía constituidas por los tan aludidos bienes, sería muy de considerar ante todo si aquella dedicación genérica *para dotación* del Instituto colocaría la pretendida fundación entre los de carácter público relacionado con alguno de los fines que se hallan atribuidos a

organismos del Estado y que el mismo regule, y, por tanto, la sometería a lo establecido en las leyes en cuanto sea preciso para obtener los beneficios de la misma, según el artículo 4.º del Real decreto de 27 de setiembre de 1,912, con lo que no le sería de aplicar la clasificación que regula el capítulo II del título II de la Instrucción de 24 de julio de 1,913 y sustancialmente vendría a parar en la misma situación jurídica de la tesis que anteriormente he expuesto y defendido.

Pero si se la estimare fundación benéfico-docente de carácter particular resultaría innegable;

A. Que los bienes procedentes del consabido origen pertenecerían de todos modos plenamente hoy a este Instituto nacional de segunda enseñanza, aunque en concepto de fundacionales.

B. Que tal fundación benéfico-docente particular consistiría precisamente en la dedicación y aplicación de esos bienes o sus rentas al Instituto *para su dotación* por la decisión que adoptaron los Sres. Obispo y Patrono y por la Real orden y el acta de posesión de 1,848; pues si de ellas, aun así interpretadas, fuera dado prescindir y se prescindiera ni habría fundación docente ni base alguna en que apoyarla. (Si la Real orden de ese Ministerio de 11 de noviembre de 1,926 admite en su número 1.º como título de bienes fundacionales, caso de ignorarse, hasta la información *ad perpetuam* ¿cómo no habían de superarle en este caso esos otros eficacísimos, escritura, Real orden y acta de posesión de 1,848, inscripción de largo tiempo en el Registro de la propiedad, inscripciones nominativas de Déuda pública y de acciones del Banco de España, etc. y bien ganada prescripción, incluso extraordinaria?).

C. Que dentro del concepto genérico *dotación*, la aplicación de ello en favor del Instituto habría de determinarse para cada año, o bien en algún proyecto de conjunto, mediante propuesta del Patronato que se nombre y aprobación por el Protectorado ejercido por este Ministerio. Artículos 46 y 79 de la citada Instrucción de 1,913.

D. Que ningunas cargas funcionales de carácter piadoso serían de atribuir ni imponer a la citada fundación docente (según lo dicho en el fundamento VIII).

E. Que de entenderse que alguna de tal índole le incumba sería de fijar mediante acuerdo del Patronato definitivo con la autoridad del Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de la Diócesis aprobado por el Protectorado ya dicho.

F. Que el Patronato debería encomendarse por modo efectivo y permanente al Director de este Instituto y algún otro elemento del mismo, asociándole, a lo sumo, en el caso del anterior apartado E. el Prelado o representación del mismo y el Patrono familiar que corresponda, sí, previo llamamiento, fuere hallado y aceptare.

G. Que en ningún caso podrían *a priori*, sin más comprobación, incluirse



como de la fundación los valores del Grupo B. del hecho 15.º de este escrito.

Entiéndase dicho cuanto este fundamento contiene como mero supuesto, en la hipótesis, que no aceptamos, de existencia real y actual de fundación benéfico docente.

X

**Supuesto de re-  
paración de la  
Congregación.**

Afectaría a nada de lo dicho que en algún punto de España exista hoy la Congregación de clérigos del oratorio de San Felipe Neri? Ni atisbo ha habido de tal pretensión en los ochenta años y pico transcurridos. Bien se comprende, pues, que sólo por no dejar escapar ni aun lo que por sutileza o mero pasatiempo podría tomarse, si surgiere, nos detenemos brevemente en esa hipotética pregunta, para responder del modo más rotundo: *no*.

No importaría nada, entre multitud de razones:

a). Porque en la exclaustración y la desamortización de 1836 y 1837 la privación del dominio de los bienes fué absoluta, sin derecho a indemnización, y, si alguna disposición posterior autorizó devoluciones de bienes, menester era pedirlos en el término máximo de cinco años, que como síntesis de las disposiciones aplicables marcó el Real decreto de 3 de febrero de 1,893 en su número 8.º y mientras los bienes estaban aún en poder del Estado, no cuando habían pasado a terceros.

b). Porque la cesión por los Sres. Obispo y Patrono al Instituto no estaba, ni por la escritura fundacional ni por los términos de la cesión misma, sujeta a cláusula alguna resolutoria en ningún caso, ni la contenían la Real orden ni el acta de posesión de 1,848; títulos perfectos para el Instituto.

c). Porque contra la Congregación expresada, o quien representarla pretendiera, si como antigua dueña de los bienes o sucesora de ella se la mira-se, tendría más especial aplicación, si cabe, la prescripción alegada en el fundamento IV; pues, como decía el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 8 de noviembre de 1,870, entre otras tantas, el que, teniendo personalidad para reclamar unos bienes y oponerse a la posesión que de ellos tiene otro, no lo hace, dejando correr válida y efícamente a favor de éste el tiempo de la prescripción, no puede después alegar derecho contra ésta si el poseedor ha reunido las condiciones exigidas por la ley.

d). Porque todo eso lo ratificó de modo expreso, precisamente contra la Congregación de San Felipe Neri, la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en lo contencioso-administrativo de 6 de julio de 1,901, (que en un caso en que ni siquiera mediaba cuanto en este media en favor del Instituto de segunda enseñanza por la misma escritura fundacional y el acto de Prelado y Patrono) declaró aplicables a dicha Congregación el Real Decreto



de 19 de febrero de 1,836, el de las Cortes de 8 de marzo del mismo año y la ley de 22-29 de julio de 1,837 todos citados ya en este escrito, y, por consecuencia de todo ello y no obstante el concordato de 1,851 y otras disposiciones invocadas, negó todo derecho a la reclamación, absolviendo a la Administración de la demanda contra ella interpuesta «a nombre de don Juan José de Lecanda en concepto de Prepósito o Superior de la Congregación de Clérigos seculares del oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares.»

De los bienes cedidos a este Instituto no hay, pues, que hablar en ese aspecto, y, aunque no nos incumbe, no huelga acaso advertir que no sabemos que tampoco en él se haya hablado nunca de la iglesia y cuanto la misma contiene, cosa radicalmente distinta y de orden espiritual sometida a autoridad y jerarquía dignas de los mayores respetos.

## XI

### **Competencia.**

No es de olvidar la naturaleza de este expediente y la esfera de acción del Protectorado benéfico-docente en cuanto el conocer de cualquier intento de inquietar o desposeer al Instituto en orden a los bienes desamortizados como de religiosos que el Ministerio de Hacienda le reconoció y entregó por Real orden y acta de posesión de 1,848 o procedentes de ellos, mientras no trascendiera a la esfera de los Tribunales y en lo gubernativo se desarrollara, correspondería a dicho Ministerio de Hacienda, no a ningún otro, venga de quien viniere tal intento y sea cual fuere la forma que revista.

## XII

### **Moral del asunto.**

Séame permitida, para concluir, una respetuosa observación que aunque también de orden legal trasciende a lo moral del asunto. Va visto (hechos 6.º al 10.º) que si el caudal ahora discutido se salvó de destruirse y perecer allá en los años de 1,837 al 48 fué precisamente porque al acto meritísimo de los Sres. Obispo y Patrono destinándolos a este Instituto puso noble y digno colofón, a instancia de la Diputación provincial de Málaga, el Ministerio de Hacienda, en la R. O. de 6 de abril de dicho último año, declarando los bienes exceptuados de la incautación y la venta por considerarlos comprendidos en el artículo 21 de la ley de 22-29 de julio de 1,837, es decir, al tenor de dicho artículo, en lo atinente al caso, *por especialmente dedicados a objeto de instrucción pública*; lo que aceptó y aprobó, al trasladarla para su cumplimiento el de Comercio e Instrucción pública, *que lo gestionó*, cual lo dice aquella.

No es, pues, posible que al cabo de más de ochenta años se intente utilizar ahora aquello como «puente» para dar a los bienes cualquier diferente destino y que sea el Ministerio de Instrucción Pública, quien, ni

por vía de Protectorado ni de ningún modo, secunde tal intento de sustraerlos a la dotación de este Instituto, dedicación, repito, por obra y gracia de la cual en bien del mismo y, por tanto, de Málaga subsisten hoy, con incremento, por cierto, demostrativo de un buen celo que no nos toca alabar aunque sea justo recordarlo, antes de terminar, frente a cualquier juicio ligero e infundado.

Por el contrario, con ser tan prolijo, por fuerza de las circunstancias, lo alegado, en este escrito, más que de todo ello, esperamos de la rectitud e ilustración probadas del Ministerio a que tengo el honor de dirigirme y de su amor a los derechos e intereses de los organismos docentes que le están confiados, el amparo de los que, con claridad meridiana, asisten y corresponden a este Instituto.

Por todo lo cual,

**SUPlico** a V. E. que, habiendo por presentado este escrito, con las tres certificaciones que le acompañan, en la audiencia concedida a los que se crean interesados, en el expediente de su razón, se sirva esa Superioridad, al resolverlo:

A. Declarar que no existe en este caso fundación alguna, ni obra pía que clasificar ni regularizar y debe respetarse en absoluto al Instituto, hoy Nacional, de segunda enseñanza de Málaga el pleno dominio y la posesión que tiene y le corresponden de cuantos bienes (comunmente conocidos por Caudal de San Felipe Neri) formen parte o directa o indirectamente provengan de los procedentes de la suprimida Congregación de San Felipe Neri de Málaga que a dicho Instituto de segunda enseñanza fueron reconocidos y entregados mediante la Real orden del Ministerio de Hacienda de seis de abril de mil ochocientos cuarenta y ocho, comunicada el veinte y ocho del mismo mes por el de Comercio, Instrucción y obras públicas a la representación del Instituto y en el acta de solemne posesión dada al mismo en Málaga el cinco de mayo siguiente de orden del Sr. Intendente y ante el Escribano Mayor de Rentas de dicha provincia don Antonio de Ayala, debiendo continuar, por tanto, tales bienes como suyos propios, para su dotación, a disposición y libre administración del mismo Instituto, bien que bajo la inspección del Ministerio de Instrucción pública con arreglo a las leyes vigentes; y, en su virtud, mandar que cesen toda intervención en ellos del Protectorado y, por lo tanto, el patronato interino y con él la gestión cobratoria de la Junta provincial de Beneficencia de Málaga, a la que se ordene entregar desde luego a la Dirección de este Instituto, con rendición de cuentas, los intereses, dividendos, rentas o cualesquiera productos percibidos, así como los documentos, títulos o papeles recibidos, por razón de dicho patronato circunstancial.

B. En su defecto (sin que por esta petición meramente *subsidiaria* renuncie ni atenúe en nada este Instituto su derecho, que deja intacto a

seguir defendiendo y reclamando, donde y como proceda, cuanto consigna el anterior apartado A.) al estimar la existencia hoy de una fundación benéfico-docente particular, clasificarla con la denominación «Caudal de San Felipe de Neri, a favor del Instituto, hoy Nacional, de segunda enseñanza de Málaga», declararla integrada por los bienes que tengan la procedencia dicha en el anterior apartado A, cual pertenecientes al citado Instituto en concepto (en el supuesto que ahora decimos) de fundacionales; declarar desde luego comprendidos en ello el inmueble y la participación en otro y los valores mobiliarios respectivamente indicados en el hecho 16.º y en el grupo A. del 15.º de este escrito, sin perjuicio de proseguir la averiguación por si también debieran atribuírsele todos o algunos de los del grupo B. del mismo hecho 15.º; disponer o cumplir para la organización y régimen de la fundación cuanto detalladamente se consigna para en sus respectivos casos en los apartados C. D. E. y F. del fundamento IX de este escrito, los cuales doy por literalmente reproducidos aquí, y ordenar que, cesando el patronato interino y con él la gestión cobratoria de la Junta provincial de Beneficencia de Málaga, ésta con rendición de cuentas, entregue al patronato definitivo que se nombre los intereses, dividendos, rentas u otros productos que haya percibido de inmuebles o de los valores del citado grupo A, y a la Dirección de este Instituto los de los valores del también citado grupo B. así como a uno u otra los documentos respectivos que por razón de tal patronato circunstancial hubiere recibido.

Es todo ello justicia, que espero de la rectitud de V. E.

O T R O S I

digo: Que, siendo de notorio interés para este Instituto conservar las tres certificaciones del Registro de la propiedad presentadas con este escrito, se acoge a lo prevenido en el segundo párrafo del artículo 37 de la Instrucción de 24 de julio de 1,913, y, acompañando también, al efecto, copia simple de cada una, debidamente reintegradas. SUPLICA a V. E. que, habiéndolas por presentadas y sea cual fuere la resolución que recaiga en este expediente, queden en él dichas copias, luego de cotejadas con sus originales y *vistos estos para tal resolución*, y se me devuelvan los mismos por conducto de la digna Junta provincial de Beneficencia, que a V. E. ha de elevar todo ello; pues así es también de justicia, que espero de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Málaga a catorce de agosto de mil novecientos treinta.—Julio Fz. Ramudo.

EXCMO. SR.

Documento n.º 1

SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTE PARTIDO.

Don Carlos del Castillo Tejada, mayor de edad, casado, de esta vecindad y con cédula personal que exhibe, como mandatario verbal de don Luis Muñoz-Cobo y Arredondo, Director del Instituto hoy Nacional de Segunda Enseñanza de esta ciudad, a S. S.<sup>a</sup> respetuosamente expone: Que dicho, señor, su mandante, necesita certificación literal, con referencia a los libros de ese Registro, de la inscripción de dominio del edificio de dicho Instituto en que el mismo se halla instalado, que es la 1.<sup>a</sup> de la finca número 1,367 obrante al folio 153 del tomo 182.

SUPLICA a S. S.<sup>a</sup> que, en méritos de ello, se sirva expedirle certificación literal de dicha inscripción, con expresión de su vigencia.

Málaga, veintiuno de julio de mil novecientos treinta. (Firmado) Carlos del Castillo. Rubricado.

---

DON JOSE UTRILLA Y UTRILLA, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD Y SU PARTIDO, AUDIENCIA TERRITORIAL DE GRANADA.

CERTIFICO: Que en vista de la precedente instancia suscrita por don Carlos del Castillo Tejada, con el objeto de obtener certificación literal del extremo a que se contrae, y acomodándose a los términos en que está concebida, he examinado en lo que ha sido necesario los libros del Archivo de mi cargo de los cuales resulta: Que al folio ciento cincuenta y tres del tomo ciento ochenta y dos, finca número mil trescientos sesenta y siete, se halla la inscripción que copiada dice así: «Primera.— Edificio nombrado de San Felipe, hoy Instituto provincial: se halla situado en la calle de Gaona de esta ciudad, distinguido con el número primero moderno: mide su superficie tres mil doscientos setenta y tres metros setenta y seis milímetros: comprende un jardín, cinco patios con fuente de dos pajas de agua tomada de la cañería de la ciudad, almacenes, salones altos y bajos y otras varias piezas y oficinas; y linda el todo del edificio por la derecha saliendo con la casa número trece calle de las Aceras, por la izquierda con la iglesia parroquial de Santa Cruz y San Felipe, y por la espalda con la casa número catorce calle de Ollerías, propia de don Manuel Rubio Velázquez, los números nueve, once y trece de la calleja sin salida del Sargento de don Miguel Martínez y la número cinco de dicha calleja propia de don Juan N. López.—La finca descrita no resulta gravada con ninguna carga ni responsabilidad desde el año mil setecientos sesenta y ocho en que por los índices de la propiedad urbana de Málaga se han investigado las vicisitudes del inmueble.—Don Tomás Guerrero de Coronado y Zapata, Presbítero, Conde de Buena-vista, dueño de la finca descrita según el título ahora presentado y de que después se hará mérito, construyó a sus expensas una Iglesia a la entrada de las tres calles Gaona, Cabeillo y de las



Parras, confinando por el altar mayor con la casa descrita al principio de esta inscripción, cuya iglesia y casa las donó gratuitamente a los Padres de la Congregación de San Felipe Neri con la condición de que si dicha Congregación dejaba de existir, los indicados bienes se aplicarían al objeto que el Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis y el Patrono dispusieran —El Estado en la creencia de que estos bienes eran Nacionales se incautó de ellos en virtud de la Ley de Desamortización del año mil ochocientos treinta y siete referente a las Comunidades de religiosos; mas como la condición que el Don Tomás Guerrero de Coronado y Zapata consignó en la escritura de cesión no permitía que estos bienes se calificaran como de Comunidades de religiosos, a instancia de esta Diputación provincial se instruyó en el Ministerio de Hacienda el oportuno expediente que dió por resultado la Real Orden que literalmente transcrita dice así: Junta Inspector del Instituto de Málaga.—Con fecha veinte y ocho de Abril último el señor Director general de Instrucción, pública, dice a esta Junta lo que copio.—Con fecha seis del corriente dice el Señor Ministro de Hacienda al de Comercio, Instrucción y obras públicas lo que sigue—Excelentísimo Señor: se ha enterado la Reina del expediente instruido en este Ministerio a consecuencia de diferentes comunicaciones dirigidas por el del cargo de V. E. reclamando los bienes procedentes de la suprimida Congregación de San Felipe Neri de Málaga para dotación del Instituto de segunda enseñanza de la misma ciudad, y conformándose S. M. con el parecer de la Dirección de Fincas del Estado y su Asesor se ha servido declarar que los referidos bienes se hallan comprendidos en el artículo veinte y uno de la Ley de veinte y nueve de Julio de mil ochocientos treinta y siete, porque la donación que de ellos hizo el Conde de Buenavista a la Congregación fué con la condición de que si ésta dejaba de existir se aplicasen al objeto que dispusiera el Reverendo Obispo de de aquella Diócesis y el Patrono, quienes han manifestado estar conformes en que se destinen al Instituto de segunda enseñanza a cuya disposición deben dejarse. Lo que de Real orden comunicada por el expresado señor Ministro digo a V. S. para los efectos consiguientes, debiendo V. S. dar cuenta a esta Superioridad luego que se entregue al Instituto en los referidos bienes. En su consecuencia en sesión celebrada en el día de hoy ha convenido se comuniqué a V. S. y a fin de que teniendo cumplido efecto la disposición arriba inserta ha nombrado a los Señores Don Joaquín María Canales, Don Francisco Genistróni y Don Joaquín María Díaz García individuos de su seno para que en su representación y asociados del Director y Depositario del Instituto se incauten y tomen posesión del indicado caudal que perteneció a la extinguida congregación de San Felipe Neri de esta ciudad. Dios gue. a V. S. ms. as. Málaga cinco de Mayo de mil ochocientos cuarenta y ocho.—Presidente: Miguel Tenorio: J. M. Díaz García.—Señor Intendente de Rentas de esta Provincia.—Basado pues en estos precedentes y en observancia de lo dispuesto por el Intendente de Rentas de esta provincia, el Señor Don José Dufóo, Administrador interino de fincas del Estado, hizo entrega de los referidos bienes, entre los cuales se encuentra la finca objeto de esta inscripción, constituyendo en posesión de ellos a la Junta inspectora del Instituto por medio de sus comisionados Don Joaquín María Cana-

les Don Francisco Genistróni y Don Joaquín María Díaz y García con la intervención y asociación de Don Juan Hurtado y Don Antonio Soriano y Pérez, Director y Administrador de dicho Instituto.—A solicitud del Don Antonio Soriano y Pérez y de conformidad con los artículos trescientos noventa y trescientos noventa y dos de la Ley Hipotecaria reformada, se inscriben los expresados documentos en virtud de los cuales el Instituto provincial de Málaga adquiere el dominio pleno de la finca de este número.—Consta lo dicho de una primera copia de la escritura de donación gratuita otorgada en esta ciudad a cinco de Julio de mil setecientos treinta y nueve ante el Escribano Don Hermenegildo Ruiz, por Don Tomás Guerrero de Coronado y Zapata, Presbítero, Conde de Buenavista, a favor de la Congregación de San Felipe Neri, cuya primera copia ha sido expedida en ocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y uno por Don Juan Eugenio Ruiz Gómez, Archivero del General de protocolos de este distrito: de la real orden inserta; del acta de posesión extendida en fecha cinco de Mayo de mil ochocientos cuarenta y ocho, ante el Escribano Don Antonio de Ayala; y de la solicitud firmada y ratificada a mi presencia por el Don Antonio Soriano y Pérez, cuyos documentos han sido presentados en este mi Registro el treinta de enero actual a las diez y cincuenta minutos de la mañana según el asiento número tres, folio dos, tomo doce del Diario, quedando en mi poder archivados la citada Real Orden, el acta de posesión y la solicitud, los dos primeros con el número treinta y dos en el legajo primero de documentos públicos y la solicitud con el número diez en el legajo segundo de documentos privados.—Y siendo conforme lo dicho con los documentos a que me refiero, extendiendo la presente que firmo en Málaga a treinta y uno de Enero de mil ochocientos setenta y dos. (Hay un nombre ilegible) Cañete.—El asiento preinserto que se encuentra vigente, está literalmente conforme con el que obra en el folio y libro bajo el número que queda citado a que me remito y firmo la presente que va extendida en dos pliegos de papel timbrado, clase séptima, serie A, números 1,865,043 y 1,864,460 en Málaga a veinte y tres de Julio de mil novecientos treinta.—José Utrilla—Rubricado.—Hay un sello en tinta del Registro de la propiedad de Málaga.

## Documento n.º 2

### SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTE PARTIDO.

Don Julio Fernández Ramudo, mayor de edad, catedrático, de esta ciudad, y con cédula personal que exhibe, como Vice-Director, en funciones accidentalmente de Director, de este Instituto hoy Nacional de 2.ª enseñanza, a S. S.ª respetuosamente expone: Que necesita acreditar en determinado expediente la posesión dada en su día a este Instituto de los bienes que fueron de la suprimida Congregación de San Felipe Neri y como quiera que el acta de tal posesión quedó archivada en ese Registro del digno cargo hoy de S. S.ª al n.º 38 del legajo primero de documentos públicos al efectuarse en 31 de enero de 1.872 la inscripción 1.ª del edificio que ocupa este Instituto (finca n.º 1,367) al folio 153 del tomo 182,

SUPLICA a S. S.<sup>a</sup> que se sirva expedirle certificación literal de dicho documento, o sea precisa y concretamente el acta expresada que ocupa el folio 13 y su vuelta de los que unidos integran dicho número 38. Así lo espera de S. S.<sup>a</sup> cuya vida guarde Dios muchos años.

Málaga 8 de agosto de 1,930.—(Firmado) Julio Fz. Ramudo.—Rubricado.

---

DON MANUEL CHANETA PINAZO, LICENCIADO EN DERECHO, ABOGADO DE ESTE ILUSTRE COLEGIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUSTITUTO DE ESTA CIUDAD Y SU PARTIDO, AUDIENCIA TERRITORIAL DE GRANADA.

CERTIFICO: Que en vista de la precedente instancia suscrita por don Julio Fernández Ramudo, con el objeto de obtener certificación literal del extremo a que se contrae y acomodándose a los términos en que está concebida, he examinado en lo que ha sido necesario los legajos del Archivo de documentos públicos de este Registro de los cuales resulta.

Que en el legajo primero de dichos documentos y ocupando el número treinta y ocho respectivo al año mil ochocientos setenta y dos se halla el acta de posesión que copiada dice así:

Posesión.—En la ciudad de Málaga a cinco de Mayo de mil ochocientos cuarenta y ocho, el Señor Administrador interino de fincas del Estado en esta Provincia Don José Dufóo, en consecuencia de lo dispuesto por el Señor Intendente de ella a virtud de lo mandado por Su Majestad en Real orden de seis de Abril para que se dejen a disposición del Instituto de segunda enseñanza de esta Plaza todos los bienes procedentes de la suprimida congregación de San Felipe Neri con objeto de su dotación, procede desde luego a su entrega constituyendo en posesión a la Junta Inspectoral por medio de sus comisionados los Señores Don Joaquín María Canales, Don Francisco Genistróni y Don Joaquín María Díaz García con la intervención y asociación de Don Juan Hurtado y Don Antonio Soriano, Director y Depositario de dicho Instituto, para lo cual ha hecho sacar y autorizado relaciones de las fincas urbanas, rústicas y censos en pró y contra y con asistencia de dichos Señores y de mí el infrascripto Escribano Mayor de Rentas de la Provincia, se constituyó en la calle de Dos Aceras casa número ocho moderno y cuarenta y dos antiguo, manzana ciento seis que habita don Juan Ramos Moreno y requirió a su inquilino facilitase el local para la data de posesión y habiéndose prestado a ello, el Señor Administrador tomó la mano al referido Señor Canales como Presidente de la Comisión, le entró en los aposentos de la casa, hizo que abriese y cerrase puertas y ventanas y verificase otros actos de verdadera posesión que en nombre de la Autoridad del Señor Intendente expuso le daba real, corporal actual vel cuasi en la referida casa en representación del referido Caudal y para los efectos prevenidos en la indicada Real orden y que como título de dicha posesión se le entregue esta acta original que los concurrentes firman rubricando las cuatro



relaciones que van por cabeza de las fincas, derechos y obligaciones del expresado Caudal y la Administración quede con copia certificada a los efectos correspondientes de todo lo cual doy fe.—Joaqn. M.<sup>a</sup> Canales.—Franc.<sup>o</sup> Genistroni.—José Dufío.—Juan Hurtado.—J. M. Díaz García.—Antonio Soriano.—Antonio de Ayala.

Concuerda con su original a que me remito y firmo la presente en Málaga a once de agosto del mil novecientos treinta.—Ldo. M. Chaneta.—Rubricado.—Está el sello en tinta del Registro de la propiedad de Málaga.

### Documento n.<sup>o</sup> 3

#### SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTE PARTIDO.

Don Julio Fernández Ramudo, mayor de edad, catedrático, de esta ciudad, y con cédula personal que exhibe, como Vice-Director, en funciones accidentalmente de Director de este Instituto hoy Nacional de 2.<sup>a</sup> enseñanza, a S. S.<sup>a</sup> respetuosamente expone: Que con referencia al edificio propiedad de este Instituto en que el mismo se halla instalado, sito en la calle de Gaona de esta ciudad, distinguido con el número primero moderno e inscrito por la primera del número 1,367 al folio 153, del tomo 182, necesita y

SUPLICA a S. S.<sup>a</sup> que se sirva expedirle certificación en relación sucinta de cualquier censo u otro gravamen que sobre tal finca aparezca, o de hallarse libre de ellos. Así lo espera de S. S.<sup>a</sup> cuya vida guarde Dios muchos años.

Málaga 8 de agosto de 1,930.—Firmado—Julio Fz. Ramudo.—Rubricado.

---

DON MANUEL CHANETA PINAZO, LICENCIADO EN DERECHO, ABOGADO DE ESTE ILUSTRE COLEGIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUSTITUTO DE ESTA CIUDAD Y SU PARTIDO, AUDIENCIA TERRITORIAL DE GRANADA.

CERTIFICO: Que en vista de la precedente instancia suscrita por don Julio Fernández Ramudo, con el objeto de obtener certificación en relación del extremo a que se contrae, y acomodándome a los términos en que está concebida, he examinado en lo que ha sido necesario los libros del archivo de mi cargo de los cuales resulta, que con respecto al edificio nombrado Instituto Provincial sito en la calle de Gaona de esta ciudad número primero moderno, registrado a nombre del Instituto Provincial de Málaga, por la inscripción primera del número mil trescientos sesenta y siete, folio ciento cincuenta y tres, tomo ciento ochenta y dos, no existen en el libro de inscripciones ni en el Diario gravámenes vigentes a partir de la creación del moderno Registro hasta hoy; y firmo la presente en Málaga a once de Agosto de mil novecientos treinta.—Ldo.—M. Chaneta.—Rubricado.—Está el sello en tinta del Registro de la propiedad de Málaga









